

ANEXO 2.

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN CIUDADANA

La Escuela Nacional de Formación Ciudadana se constituye como el dispositivo pedagógico central de la Estrategia Nacional de Participación Ciudadana y Democracia 2026. Su propósito fundamental es transformar la participación de un acto meramente procedimental o ritual en un ejercicio incidente, informado y con capacidad de transformación social, cerrando la brecha entre el reconocimiento normativo y el ejercicio efectivo del derecho a participar.

1. **Fundamentación Estratégica y Conceptual** La Escuela se define como un sistema de pedagogía pública y transferencia metodológica diseñado para cualificar el liderazgo social en Colombia. A diferencia de modelos educativos tradicionales, esta propuesta se basa en el aprendizaje institucional y la escucha activa, utilizando los resultados de los estudios de percepción ciudadana y los *trackers* de opinión para ajustar sus contenidos a las preocupaciones reales de los territorios. Su enfoque es multidimensional, integrando la formación técnica con el fortalecimiento de la cultura cívica y la confianza institucional.

2. Objetivos de Formación

- 2.1. Fortalecer capacidades técnicas: Capacitar a la ciudadanía en el uso de herramientas legales como el derecho de petición y mecanismos de control social.
- 2.2. Promover la participación incidente: Brindar metodologías para que el diálogo social en los encuentros territoriales se traduzca en compromisos verificables y trazables.
- 2.3. Cualificar el liderazgo democrático: Desarrollar habilidades en resolución pacífica de conflictos, liderazgo comunitario y comprensión de lo público.

3. **Metodología y Alcance Operativo** La Escuela operará bajo un modelo mixto, combinando una plataforma de aprendizaje en línea con talleres presenciales en territorio, garantizando así una cobertura nacional con pertinencia local.

- **Meta Poblacional:** Se proyecta la formación de 25,000 ciudadanos durante la vigencia 2026, incluyendo líderes comunales, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y comunidades étnicas.
- **Arquitectura Territorial:** La formación se desplegará a través de las siete macrorregiones y subregiones estratégicas, apoyándose en los enlaces territoriales para la convocatoria y la mediación cultural.
- **Articulación con la Caja de Herramientas:** Los contenidos formativos estarán directamente vinculados a la Caja de Herramientas de Participación, asegurando que los ciudadanos utilicen protocolos estandarizados de escucha activa y sistematización de compromisos.

4. Ejes Curriculares Propuestos

- **Módulo I: El Ciudadano y el Estado:** Estructura del poder público, derecho de acceso a la información y transparencia activa.
- **Módulo II: Herramientas para la Incidencia:** Derecho de petición, gestión de PQRS y control social a la gestión pública.

- Módulo III: Diálogo y Deliberación: Metodologías de escucha activa, resolución de conflictos y construcción de agendas territoriales.
 - Módulo IV: Gobierno Abierto y Tecnología: Uso de datos abiertos, tableros de control y plataformas de participación digital.
4. Alianzas y Sostenibilidad Para garantizar la calidad académica y el reconocimiento de los procesos formativos, la Escuela buscará la articulación con actores estratégicos como el SENA, universidades públicas y centros de pensamiento especializados. Asimismo, se integrará con la oferta institucional de la Casa de Nariño de Puertas Abiertas, utilizando la sede presidencial como un espacio de pedagogía cívica y memoria democrática.
6. Cronograma de Implementación 2026
- Fase de Alistamiento (Enero-Febrero): Diseño de módulos pedagógicos, configuración de la plataforma virtual y definición de criterios de selección de formadores.
 - Fase de Ejecución (Marzo-Septiembre): Lanzamiento nacional, ciclos de formación virtual y talleres presenciales articulados a los encuentros territoriales.
 - Fase de Evaluación (Octubre-Diciembre): Medición de impacto, certificación de participantes y sistematización de lecciones aprendidas para la vigencia 2027.

Este modelo de formación además de corresponder a una actividad educativa, también contribuye como una herramienta de responsabilidad social institucional que busca elevar la calidad del debate público y consolidar una gobernanza multinivel basada en el conocimiento y la corresponsabilidad.

La Escuela Nacional de Democracia y Participación Ciudadana estructurada como el componente pedagógico central de la Estrategia Nacional de Participación Ciudadana y Democracia 2026 bajo la ejecución directa de la Oficina de Relacionamento con el Ciudadano (ORC) del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Fundamentación Jurídica y Marco Institucional

La creación y puesta en marcha de la Escuela se sustenta en el mandato constitucional que define la participación ciudadana como un principio estructural del Estado y un derecho fundamental que las autoridades deben garantizar materialmente. Desde la perspectiva administrativa, la propuesta se ampara en el Decreto 2647 de 2022 y, de manera específica, en la Resolución 1577 de 2025, la cual compila los Grupos Internos de Trabajo del DAPRE y asigna al Grupo de Democracia y Participación Ciudadana, adscrito a la ORC, la función de liderar los procesos de formación y fortalecimiento de capacidades ciudadanas. Jurídicamente, la Escuela opera como un mecanismo para cumplir con la Ley 1757 de 2015, orientando la acción estatal hacia una participación incidente que trascienda lo formal y se convierta en un insumo real para la gestión del Ejecutivo.

Argumentos Técnicos y Metodológicos

Técnicamente, la Escuela se concibe como un dispositivo pedagógico de gestión del conocimiento diseñado para cualificar el liderazgo social y reducir la brecha entre el reconocimiento normativo del derecho a participar y su ejercicio efectivo. El modelo pedagógico se fundamenta en un sistema de aprendizaje mixto, que integra una plataforma virtual de cobertura nacional con talleres presenciales en territorio, permitiendo una formación situada que responde a las realidades sociopolíticas de las regiones. La Escuela no actúa como un ente aislado, sino que se articula estructuralmente con la Caja de Herramientas de Participación, la cual provee los protocolos de escucha activa, guías de convocatoria y metodologías de sistematización que los ciudadanos aprenden a aplicar para garantizar que sus intervenciones tengan incidencia real en las decisiones públicas.

Componentes Operativos y Despliegue Territorial

La operación de la Escuela está orientada a alcanzar una meta ambiciosa de 25,000 ciudadanos formados en competencias críticas como el ejercicio del derecho de petición, la veeduría ciudadana y el control social a la gestión pública. El despliegue operativo se apoya en la arquitectura territorial de la ORC, utilizando a los enlaces departamentales y regionales como facilitadores de la convocatoria y mediadores pedagógicos en las zonas de mayor sensibilidad social, como el Catatumbo, la Mojana y el Pacífico. Para su ejecución, se requiere la vinculación de un equipo interdisciplinario que incluye perfiles especializados en pedagogía, ciencias sociales y derecho, encargados de producir contenidos con lenguaje claro y enfoque diferencial que aseguren la inclusión de jóvenes, mujeres, comunidades étnicas y víctimas del conflicto.

Sostenibilidad y Financiamiento

La sostenibilidad financiera de la propuesta está garantizada a través de los recursos de funcionamiento del DAPRE, específicamente bajo el rubro de Recursos Corrientes de la Nación (10), con una asignación que forma parte del presupuesto global de la estrategia de relacionamiento ciudadano de aproximadamente 13,598 millones de pesos. La ejecución se rige por el cronograma estratégico de 2026, que inicia con una fase de alistamiento y diseño de módulos en el primer bimestre, seguida por la operación plena y ciclos de formación intensiva entre marzo y septiembre, concluyendo con una fase de evaluación de impacto y certificación de los participantes.

Impacto en la Política Pública de Gobierno Abierto

El resultado esperado de la Escuela es la consolidación de un legado de gobernanza multinivel, donde la ciudadanía capacitada actúe como un socio estratégico del Estado en la vigilancia de los recursos y la construcción de políticas públicas. Al fomentar una cultura cívica informada y dotar a los líderes sociales de herramientas técnicas para la interlocución con el Gobierno Nacional, la ORC busca elevar los niveles de confianza institucional y asegurar que la participación ciudadana sea un proceso trazable, verificable y, sobre todo, incidente en la transformación de los territorios.

En el marco de la Estrategia Nacional de Participación Ciudadana y Democracia 2026, el enfoque diferencial se garantiza a través de un modelo pedagógico y operativo que reconoce la diversidad social, cultural y territorial del país como eje central de la gestión pública. Este compromiso se materializa específicamente en la Escuela Nacional de Formación Ciudadana mediante los siguientes mecanismos técnicos y operativos:

- **Contenidos y metodologías adaptadas:** Los procesos formativos no son genéricos; se alimentan de los estudios de percepción y caracterización ciudadana para asegurar que los contenidos, lenguajes y enfoques pedagógicos respondan a las preocupaciones reales y realidades específicas de cada territorio. Esto permite lo que las fuentes denominan una "pedagogía social situada", ajustada a las dinámicas de participación locales.
- **Inclusión de grupos de valor específicos:** El modelo incorpora formalmente enfoques de género, juventudes, etnicidad, discapacidad, campesinado, población LGBTIQ+ y víctimas del conflicto armado. Para garantizar su participación efectiva, la Escuela y la Caja de Herramientas incluyen metodologías adaptadas a las realidades de cada uno de estos grupos.
- **Mediación cultural y salvaguardas:** La gestión con poblaciones étnicas (afrocolombianas, indígenas, Rrom y raizales) y organizaciones diversas se realiza mediante mediación cultural y protocolos de accesibilidad, garantizando una participación incidente con salvaguardas explícitas de no discriminación.
- **Arquitectura territorial diferenciada:** La formación se despliega prioritariamente en subregiones con brechas históricas, conflictividad y pobreza, como el Catatumbo, la Mojana y el Pacífico, donde los enlaces territoriales coordinan una interlocución que respeta las particularidades sociopolíticas de la zona.
- **Accesibilidad y Lenguaje Claro:** Se promueve el uso de lenguaje claro y formatos accesibles para eliminar barreras cognitivas y comunicativas, facilitando que personas con diversos niveles de formación o condiciones de discapacidad puedan ejercer su derecho al control social y la participación.

El enfoque diferencial no es solo una declaración de principios, sino un componente operativo que utiliza la evidencia empírica de los territorios para transformar la formación ciudadana en un proceso inclusivo y pertinente para todas las poblaciones.

Conclusiones Estratégicas y Técnicas

La primera conclusión fundamental reside en que la Escuela no se concibe como un centro de capacitación aislado, sino como el motor pedagógico de una política de Gobierno Abierto que busca cerrar la brecha histórica entre el reconocimiento normativo del derecho a participar y su ejercicio material. Al proponer la formación de veinticinco mil ciudadanos, la estrategia trasciende la participación ritual y dota a los líderes sociales de capacidades técnicas en control social y derecho de petición, elementos esenciales para que la vigilancia sobre lo público sea rigurosa y fundamentada. Este despliegue masivo es una respuesta técnica

a la desconfianza institucional, convirtiendo el conocimiento ciudadano en un activo para la legitimidad del Estado.

Desde la perspectiva operativa, se concluye que la integración de la Escuela con la Caja de Herramientas de Participación garantiza una estandarización metodológica sin precedentes en la Presidencia de la República. Esta articulación asegura que los procesos de formación no se limiten a la teoría, sino que entreguen instrumentos prácticos como protocolos de escucha activa y guías de deliberación incidente, permitiendo que los compromisos adquiridos en los encuentros territoriales sean trazables y verificables. La Escuela funciona, por tanto, como el soporte técnico que garantiza que el diálogo social tenga un método y una finalidad pública clara.

Finalmente, el uso de estudios de percepción y trackers como insumo para el currículo pedagógico demuestra una gestión del conocimiento basada en evidencia. Esto permite que la oferta educativa de la Escuela no sea estática, sino que se adapte en tiempo real a las preocupaciones y expectativas ciudadanas detectadas en las regiones. La Escuela se consolida así como un dispositivo de escucha activa que traduce los datos estadísticos en contenidos formativos situados, respondiendo con pertinencia a las realidades de las subregiones con mayor sensibilidad social y conflictividad.

Recomendaciones de Política y Operación

En cuanto a las recomendaciones, es imperativo asegurar que el despliegue de la Escuela se realice a través de la arquitectura territorial de los 52 enlaces departamentales y locales, garantizando que la formación llegue a las zonas rurales dispersas y a los territorios fronterizos priorizados. Para maximizar el impacto, se recomienda que la plataforma mixta de aprendizaje no solo sea un repositorio de información, sino un espacio de interacción que facilite el registro y la sistematización de experiencias de control social exitosas, permitiendo que la Escuela sea también una red de aprendizaje entre pares.

Se recomienda fortalecer la articulación de la Escuela con la iniciativa de Casa de Nariño de Puertas Abiertas, utilizando la sede presidencial como un laboratorio de pedagogía cívica donde los ciudadanos formados puedan ejercer prácticas de transparencia activa. Esto implica que las agendas culturales y de economía popular se conviertan en casos de estudio dentro de la Escuela, demostrando cómo la democratización de los espacios físicos del Estado es una forma tangible de participación ciudadana. La formación debe enfocarse en el uso de lenguaje claro y datos abiertos para desmitificar la complejidad administrativa y empoderar al ciudadano frente a la gestión del Centro de Gobierno.

Para garantizar la sostenibilidad del modelo más allá de la vigencia 2026, se recomienda que la Oficina de Relacionamento con el Ciudadano establezca alianzas estratégicas con la academia y organismos multilaterales. Estas coaliciones permitirán validar las metodologías de la Escuela bajo estándares internacionales de participación democrática y asegurar que la capacidad

instalada en los líderes comunitarios permanezca como un legado institucional. Asimismo, es crítico que el sistema de seguimiento de la Escuela esté integrado a los tableros de control de compromisos del DAPRE, de modo que se pueda medir la correlación entre la formación ciudadana y la efectividad del control social sobre los recursos y proyectos territoriales.

Por último, se recomienda que el enfoque diferencial e interseccional sea un eje transversal obligatorio en todos los módulos de la Escuela, adaptando las herramientas de participación a las lenguas, culturas y realidades de los pueblos étnicos y poblaciones vulnerables. La recomendación final es formalizar un protocolo de devolución de resultados, donde la ciudadanía formada reciba retroalimentación constante sobre cómo sus acciones de control y participación están incidiendo efectivamente en los ajustes de la política pública, cerrando así el ciclo de la democracia incidente y restaurando de manera definitiva la confianza en el vínculo Estado-sociedad.

La propuesta de la Escuela Nacional de Democracia y Participación Ciudadana del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se configura como un dispositivo técnico y pedagógico de gestión del conocimiento diseñado para transformar el relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil. Bajo la ejecución directa de la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano, esta iniciativa busca cualificar el ejercicio de la ciudadanía mediante la formación sistemática de veinticinco mil personas en herramientas críticas de control social y derecho de petición. El modelo trasciende la educación tradicional al integrarse como un sistema operativo que utiliza la evidencia empírica de los territorios para ajustar sus contenidos curriculares y metodológicos, asegurando pertinencia y legitimidad. Esta escuela es el pilar pedagógico de la Estrategia Nacional 2026, orientada a elevar la confianza institucional y consolidar una democracia incidente que supere las prácticas simbólicas del pasado.

La Escuela Nacional de Democracia y Participación Ciudadana surge como el eje transformador de la pedagogía pública dentro del Centro de Gobierno, centrando su acción en el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para un diálogo social con método. Se define como un instrumento de gobierno abierto que busca dotar a la ciudadanía de las competencias necesarias para interactuar de manera informada y proactiva con la institucionalidad presidencial. A través de una plataforma mixta que combina la virtualidad con el despliegue territorial, la escuela se posiciona como el espacio donde se materializa el compromiso del Estado de pasar de una atención reactiva a una relación pedagógica e incidente. La introducción de este modelo responde a la necesidad de modernizar la gestión pública, asegurando que la participación ciudadana sea un activo estratégico para la estabilidad democrática y la transparencia institucional.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, la creación de la escuela se justifica por la persistente brecha entre el marco normativo del derecho a participar y su ejercicio material efectivo en los territorios. La insuficiencia de planta y de capacidades especializadas en el nivel central para procesar y responder a la masiva demanda de comunicaciones, que superó las trescientas

setenta y cuatro mil radicaciones en 2025, exige que la ciudadanía cuente con herramientas técnicas para cualificar sus solicitudes y ejercer un control social riguroso. La escuela permite reducir riesgos de mora administrativa y silencios administrativos al fomentar el uso del lenguaje claro y el conocimiento de los procedimientos legales por parte de los líderes sociales. Jurídicamente, la iniciativa desarrolla los mandatos de la Ley 1757 de 2015 y la Resolución 1577 de 2025, garantizando que la inversión en participación produzca resultados verificables en términos de legitimidad y confianza pública.

CONTEXTO

El contexto institucional actual está marcado por una erosión de la confianza ciudadana y una fragmentación territorial que ha limitado el impacto de los mecanismos de participación formal. La ciudadanía percibe una desconexión entre las decisiones tomadas en el nivel central y las necesidades locales, lo que ha generado esquemas de atención meramente procedimentales sin capacidad de incidencia real. La escuela se inserta en este escenario como una respuesta estratégica desde la Presidencia para descentralizar la formación y democratizar el conocimiento sobre el funcionamiento del Estado. Este entorno exige que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República asuma un rol conductor, integrando la escucha activa con procesos sistemáticos de formación que reconozcan la diversidad social y cultural de las regiones priorizadas por su alta sensibilidad social.

ALCANCE

El alcance de la escuela es de carácter nacional y se despliega a través de una arquitectura territorial organizada en siete macrorregiones y treinta y dos enlaces departamentales. El programa está diseñado para impactar de manera prioritaria en zonas de especial interés estratégico como el Catatumbo, la Mojana, el Magdalena Medio y las zonas de frontera, asegurando una presencia institucional diferenciada. Operativamente, el alcance abarca el diseño y ejecución de módulos pedagógicos, la operación de una plataforma de aprendizaje en línea y la realización de talleres presenciales articulados a los encuentros territoriales. Funcionalmente, la escuela se integra con la Caja de Herramientas y el sistema de estudios de percepción, permitiendo que el aprendizaje institucional se traduzca en una mejora continua de la calidad de la atención y en la construcción de compromisos trazables con la comunidad.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

El objetivo general de la escuela es consolidar un sistema de formación ciudadana que fortalezca el liderazgo social y la comprensión de lo público para garantizar una participación incidente y un control social efectivo sobre la gestión gubernamental. Entre los objetivos específicos se destaca la capacitación técnica de veinticinco mil ciudadanos en el uso del derecho de petición y mecanismos de vigilancia ciudadana para elevar la calidad de la interlocución con el Estado. Asimismo, se busca estandarizar las metodologías de diálogo social mediante el uso de la Caja de Herramientas, asegurando que cada espacio deliberativo genere compromisos verificables. Otro objetivo crítico es fomentar una cultura de transparencia activa y datos abiertos, permitiendo que la ciudadanía utilice la

información pública como insumo para la toma de decisiones territoriales y la prevención de riesgos de corrupción.

RIESGOS E IMPACTOS

La implementación de la escuela enfrenta riesgos operativos relacionados con la sobrecarga administrativa y la posible dispersión de agendas en el territorio, los cuales se mitigan mediante una gobernanza clara y el uso de tableros de control de compromisos. Existen también riesgos jurídicos asociados al tratamiento de datos personales en los procesos de inscripción y formación, que exigen protocolos estrictos de protección de información conforme a la ley. El impacto esperado se traduce en un incremento de la confianza institucional y la reducción del rezago administrativo gracias a la cualificación de las demandas ciudadanas. Socialmente, la escuela impactará en el fortalecimiento de la cohesión social y el empoderamiento de grupos históricamente excluidos, facilitando que su participación deje de ser simbólica y se convierta en un insumo real para el ajuste de las políticas públicas del Centro de Gobierno.

LÍNEAS DE ESTUDIO

Las líneas de estudio curriculares se enfocan en la producción de conocimiento aplicado y se dividen en cuatro ejes fundamentales: democracia participativa, control social, derecho de petición y seguridad humana. El eje de democracia profundiza en la cultura cívica y el liderazgo social, mientras que la línea de control social entrega herramientas técnicas para la vigilancia de los recursos públicos y la gestión de PQRS. La formación en derecho de petición se orienta a mejorar la efectividad de las solicitudes ciudadanas, reduciendo las respuestas evasivas y promoviendo el lenguaje claro. Adicionalmente, se incluyen estudios de caracterización sobre seguridad humana y percepción ciudadana, permitiendo que los estudiantes comprendan las tendencias sociopolíticas de su entorno y utilicen la evidencia empírica para fundamentar sus propuestas de incidencia territorial.

METODOLOGÍA

La metodología se basa en un modelo de investigación-acción y pedagogía social situada que integra el uso de tecnologías de la información con el trabajo de campo presencial. Se utiliza una plataforma virtual para la formación masiva, complementada con talleres deliberativos en las regiones que emplean la Caja de Herramientas para estandarizar el registro y la sistematización de aportes. El diseño metodológico exige rigurosidad técnica, incorporando los resultados de los estudios de percepción y trackers para asegurar que los contenidos curriculares respondan a las preocupaciones efectivamente expresadas por la ciudadanía en cada periodo. Este enfoque permite un ciclo de mejora continua donde la formación se ajusta a la realidad social cambiante, garantizando que la escuela funcione como un dispositivo de escucha activa y no solo como un canal de transmisión unidireccional de información.

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que al finalizar la vigencia 2026, la escuela haya certificado a veinticinco mil ciudadanos con capacidades instaladas para el control social y la incidencia política. Un resultado fundamental será la mejora en la calidad de las respuestas institucionales y la reducción significativa del silencio administrativo, producto de una ciudadanía que utiliza mejor los canales oficiales. Territorialmente, se espera la consolidación de agendas ciudadanas documentadas y compromisos trazables en los treinta y dos departamentos, fortaleciendo la gobernanza multinivel de la Presidencia. Institucionalmente, la escuela dejará como resultado una Caja de Herramientas validada y un sistema de formación transferible que servirá de legado para futuros gobiernos, posicionando el modelo de gobierno abierto como una práctica estructural y permanente del Estado colombiano.

LÍNEA DE TIEMPO MARZO A AGOSTO

Durante el periodo de marzo a junio se llevará a cabo el primer ciclo intensivo de despliegue regional, iniciando la operación plena de la plataforma virtual y activando los primeros módulos formativos en las subregiones priorizadas. En este trimestre se realizará la distribución masiva de la Caja de Herramientas y se integrarán las primeras dos mediciones del tracker de percepción ciudadana para ajustar los enfoques pedagógicos. Entre julio y agosto, la escuela entrará en su fase de profundización, ejecutando el segundo ciclo de encuentros territoriales y fortaleciendo la gestión de aliados sociales y gremiales. Para finales de agosto, se habrá consolidado la tercera medición del sistema de evaluación de impacto, permitiendo realizar un balance intermedio de los ciudadanos formados y la efectividad de los procesos deliberativos antes de iniciar la fase de cierre anual y sistematización de resultados finales.

POBLACIÓN OBJETIVO Y UNIVERSO POBLACIONAL

El universo poblacional identificado comprende más de quinientos cuarenta y un mil ciudadanos registrados en el sistema del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con una mayoría de personas naturales y una fuerte concentración en centros urbanos. La población objetivo de la escuela se focaliza en veinticinco mil ciudadanos bajo un enfoque diferencial e interseccional que prioriza a líderes sociales, jóvenes, mujeres rurales, víctimas del conflicto y comunidades étnicas afrocolombianas, indígenas, Rrom y raizales. La estrategia también incluye a poblaciones vulnerables en zonas de frontera y territorios con alta conflictividad social, asegurando que la pedagogía cívica llegue a quienes enfrentan las mayores barreras de acceso al Estado. Esta focalización busca equilibrar la representatividad regional y asegurar que los liderazgos comunitarios cuenten con las mismas herramientas técnicas que los actores institucionales del nivel central.

PROYECCIÓN ESTRATEGICA

La Escuela Nacional de Democracia y Participación Ciudadana se concluye como un instrumento indispensable para garantizar la sostenibilidad del modelo de gobierno abierto y la legitimidad de la acción presidencial en territorio. Se recomienda formalizar la gobernanza pedagógica mediante una agenda única articulada con los ministerios y agencias del sector para evitar la duplicidad de

esfuerzos formativos en las regiones. Es fundamental asegurar la interoperabilidad tecnológica entre la plataforma de la escuela y los sistemas de PQRSD para que el aprendizaje ciudadano se traduzca en una mejora automática de la gestión documental y la trazabilidad de compromisos. Finalmente, se sugiere documentar cada proceso metodológico para que la escuela se convierta en un legado permanente de la administración, permitiendo que la cultura de la participación incidente y el control social basado en evidencia trascienda la vigencia 2026 y fortalezca estructuralmente la democracia en Colombia.

La vinculación entre la Escuela Nacional de Formación Ciudadana y el programa Museo Abierto se establece a través de su pertenencia a la misma Estrategia Nacional de Participación Ciudadana y Democracia 2026, donde ambos operan como ejes complementarios para transformar la relación entre el Estado y la ciudadanía. Según las fuentes, esta conexión se manifiesta en los siguientes puntos clave:

- **Pedagogía Cívica y Resignificación Simbólica:** Mientras la Escuela se encarga de la formación técnica en temas como el derecho de petición y el control social, el programa Museo Abierto (dentro del eje "Casa de Nariño de Puertas Abiertas") actúa como un dispositivo de pedagogía cívica y memoria popular, Su función es resignificar la sede de gobierno como un espacio de cultura ciudadana accesible, proporcionando el marco simbólico donde se ejerce la formación democrática.
- **Modelo de Gobierno Abierto:** Ambos componentes son pilares de la política de gobierno abierto de la Presidencia, La Escuela dota a los ciudadanos de capacidades para una participación incidente, mientras que Museo Abierto democratiza materialmente el acceso a la Casa de Nariño, convirtiéndola en un bien público donde se facilita el diálogo y el reconocimiento mutuo entre la institucionalidad y los grupos de valor.
- **Articulación Operativa en la Estrategia 2026:** El despliegue de la estrategia contempla fases sucesivas donde los ciclos de formación ciudadana se integran con las agendas culturales y de memoria, De acuerdo con las fuentes, los equipos técnicos de la Escuela y de Casa de Nariño de Puertas Abiertas trabajan de manera articulada para que los procesos pedagógicos estén situados en realidades territoriales y culturales, utilizando la sede presidencial como un escenario de cohesión social y fortalecimiento de la confianza pública.
- **Gestión del Conocimiento:** Los resultados de los estudios de percepción ciudadana que alimentan los contenidos de la Escuela también informan la agenda de Museo Abierto, asegurando que la oferta cultural y pedagógica responda a las preocupaciones y sentidos comunes de la ciudadanía frente a la gestión pública y la democracia.